



Señor

**JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA**

E. S. D.

**REFERENCIA:**

<b>TIPO DE PROCESO:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>MABIS MERCADO RUA</b>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>COLFONDOS- PORVENIR – COLPENSIONES – UGPP</b>
<b>RADICADO:</b>	<b>44001310500120240006800</b>

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA**

**ORLANDO DAVID PACHECO CHICA**, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderado judicial de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP para todos los Departamentos a nivel Nacional** de conformidad con el Poder General conferido mediante Escritura Pública No. 170 del 17 de enero de 2023 de la Notaría Setenta y Tres del Circuito de Bogotá otorgada por el Dr. Javier Andrés Sosa Pérez en su calidad de Subdirector de Defensa Judicial, la cual modificó parcialmente la escritura pública No.1970 del 9 de Octubre de 2013 de la Notaría 28 del círculo de Bogotá, modificada en su artículo 1º por la Escritura Pública No. 4251 del 29 de Julio de 2022 de la Notaría Setenta y Tres (73) del Circuito de Bogotá; por medio del presente escrito, respetuosamente, acudo ante esta Judicatura dentro del término legal correspondiente, con el fin de contestar la demanda Ordinaria Laboral, interpuesta en contra de nuestra representada.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 del Código de Procedimiento Laboral, esta defensa se pronunciará respecto de los fundamentos de hecho y de derecho esbozados en el escrito contentivo de la demanda, demostrando argumentativamente a través de las excepciones pertinentes, que lo pretendido por el extremo accionante, carece de vocación de prosperidad.

**RESPECTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Pese a que la UGPP carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente litigio, nos oponemos a que se declare la nulidad del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad supuestamente efectuado por la parte demandante, toda vez que nuestra poderdante desconoce los términos y circunstancias bajo las cuales se efectuó dicho traslado y por tanto corresponde a la parte accionante acreditar los supuestos de hecho necesarios para la declaratoria que pretende.

En segundo lugar, nos oponemos a que se autorice trasladar a la accionante del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, dado que en virtud del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 no es procedente el traslado de un régimen a otro de un afiliado a quien le faltaren menos de 10 años para alcanzar la edad requerida para pensionarse, circunstancia que eventualmente se configura en el caso *sub examine*, por lo que solicitamos al Despacho determinar tal circunstancia a través de los elementos de prueba obrantes en el plenario, teniendo en cuenta la edad de la parte demandante.

Por otra parte, nos oponemos a que se ordene a la UGPP recibir como afiliada a la parte accionante, puesto que aun cuando fuera procedente dicho traslado, la entidad a la cual representamos no



sería la competente para asumir la afiliación deprecada, toda vez que la entidad que actualmente es responsable de la administración del régimen de prima media con prestación definida es COLPENSIONES.

Nos oponemos igualmente a que se le imponga sanción alguna a nuestra prohijada por negarse a recibir como afiliada a la parte demandante, dado que como se indicó anteriormente es COLPENSIONES y no la UGPP, quien tiene la competencia para recibir nuevos afiliados, como se puede constatar en los Decretos 4121 de 2011<sup>1</sup> y 575 de 2013<sup>2</sup>.

Finalmente nos oponemos a que se condene en costas a nuestra poderdante, dado que su proceder tanto en sede administrativa como en el presente litigio ha sido ajustado a derecho y no adolece de actuaciones temerarias que ameriten la imposición de la condena en costas deprecada por quien acciona.

## RESPECTO A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

**PRIMERO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**SEGUNDO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**TERCERO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**CUARTO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**QUINTO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**SEXTO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**SÉPTIMO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**OCTAVO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**NOVENO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**DECIMO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**DECIMO PRIMERO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

<sup>1</sup> Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

<sup>2</sup> Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP - y se determinan las funciones de sus dependencias.



**DÉCIMO SEGUNDO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**DÉCIMO TERCERO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**DÉCIMO CUARTO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**DÉCIMO QUINTO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**DÉCIMO SEXTO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**DÉCIMO OCTAVO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**DÉCIMO NOVENO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**VIGÉSIMO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** No le consta a esta defensa la situación fáctica que se describe, toda vez que, no se encuentra soporte probatorio en el expediente que nos fue suministrado. Que se pruebe.

### **FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA**

A través de la demanda Ordinaria Laboral que es de nuestra atención, la parte accionante en esencia persigue que el acto jurídico a través del cual se efectuó su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sea dejado sin efectos, por cuanto afirma que dicho traslado tuvo lugar en razón a que la Administradora de Fondos de Pensión que funge como demandada, la indujo en error a fin que se afiliara a dicho fondo, sin informarle de las implicaciones y consecuencias que se derivarían del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Con fundamento en lo anterior, la demandante solicita su traslado al régimen de prima media con prestación definida.

Respecto a los pedimentos de quien acciona sea lo primero decir que en virtud del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993<sup>3</sup>, solo es procedente trasladarse de un régimen pensional a otro si al afiliado que solicita dicho traslado le faltaren más de 10 años para cumplir con el requisito de edad exigido por la norma para acceder a una pensión de vejez, circunstancia que eventualmente

---

<sup>3</sup> “(...) el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”



no se configura en el presente caso, por lo que deberá revisarse el documento de identidad de la parte demandante a fin de establecer la edad que ostenta en la actualidad.

Por otra parte, y como ya se ha manifestado anteriormente en este memorial, en caso de que fuera jurídicamente viable que la parte accionante retornara del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida, la UGPP no sería la entidad llamada a asumir su afiliación, en razón a que en virtud del artículo 52 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 4121 de 2011 la entidad encargada de administrar el régimen de prima media con prestación definida es COLPENSIONES. Adicional a lo anterior, se tiene que, mediante Decreto 2196 de 2009, a partir del 12 de junio de 2009, fecha en la que se decretó la liquidación administrativa de CAJANAL, la nómina de afiliados a dicha entidad fue trasladada masivamente a COLPENSIONES, razón por la cual la UGPP carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente litigio.

Por otra parte, es preciso indicar que en lo que respecta a la presunta omisión de la Administradora de Fondos de Pensiones de informar y asistir con buen consejo a quien solicite un traslado de régimen pensional, será dicha entidad la que deba desvirtuar tal afirmación, dado que escapa del campo de conocimiento de nuestra poderdante las condiciones en las cuales la entidad en comento efectuó el traslado y afiliación de quien acciona.

Con fundamento en todo lo anterior, de la manera más respetuosa nos permitimos solicitar al Sr. Juez que al desatar el litigio del caso que nos ocupa tenga en cuenta que no es nuestra defendida la entidad llamada a responder por las obligaciones que eventualmente se deriven de los resultados del proceso y que en todo caso los pedimentos de la demandante carecen de vocación de prosperidad con fundamento en las normas que rigen la materia.

## EXCEPCIONES PREVIAS

### CADUCIDAD

Es preciso solicitar al Despacho, se sirva verificar que en el caso concreto no haya operado el fenómeno jurídico de la caducidad el cual se presenta cuando la demanda no se interpone dentro del término fijado por el legislador. Frente a ese particular, el H. Tribunal Administrativo del Chocó en providencia fechada del 14 de abril de 2016, radicación No. 27001 23 33 000 2016 00013 00, dijo que:

*“El derecho al acceso a la administración de justicia, garantizado con el establecimiento de diversos procesos y jurisdicciones, conlleva el deber de un ejercicio oportuno, razón por la cual, se han establecido legalmente términos de caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas en vía judicial.”*

Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, con respecto a la caducidad de las acciones, ha manifestado lo siguiente:

*"La caducidad, ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, es una institución jurídica que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean el sólo transcurso del tiempo. Su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley la que, al señalar el término y el momento de su iniciación, indica el término final invariable o dies fatalis.*



*Para que se dé el fenómeno jurídico de la caducidad, sólo bastan dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción. Iniciado el término con la publicación, notificación o comunicación lo que ocurra, de ahí en adelante no tiene virtualidad alguna para modificar el plazo perentorio y de orden público señalado por la ley. El término se cumple inexorablemente."*

Así mismo, en sentencia del siete (07) de marzo de dos mil doce (2012), el honorable Consejo de Estado, señaló:

*"...La caducidad [procesal] como fenómeno jurídico, constituye propiamente una sanción para el titular del derecho que omite poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional dentro del lapso dispuesto por el ordenamiento jurídico para reclamarlo y, desde el punto de vista estrictamente procesal, se erige como un hecho que enerva o extingue la pretensión desde la base o el nacimiento; por consiguiente, debe ser declarado, aún de oficio, siempre que el fallador de primera o segunda instancia lo encuentre probado, a términos de lo dispuesto por el artículo 164º del C.C.A.  
(...)"*

El tratadista Carlos Betancur Jaramillo, en su obra Derecho Procesal Administrativo, dice:

*"Ha sostenido en forma reiterada el Consejo de Estado que la caducidad cuando aparezca clara, desde un principio deberá decretarse en el primer auto que se dicte dentro del proceso, por razones de economía procesal y de seriedad, ya que no tiene sentido que las partes se sometan a un debate costoso y de larga duración para terminar con una declaración de tal naturaleza. En cambio, cuando la caducidad no aparezca clara, bien porque se alegue falta de notificación o defectos en ésta o se discuta la fecha del acaecimiento de los hechos, u otra circunstancia similar, deberá tramitarse el proceso, para luego en la sentencia, mediante el análisis del acervo probatorio, definir en primer término si la acción fue ejercitada en tiempo o no. El fenómeno de la caducidad, que constituye así una excepción de fondo, podrá ser motivo de alegación de parte o de declaratoria oficiosa."*

Así las cosas, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 207 del CPACA al juez contencioso para ejercer el control de legalidad e ir saneando los vicios que puedan suscitarse en el trascurso del proceso; solicitamos muy respetuosamente a su señoría, que previo estudio y análisis de la operancia del fenómeno jurídico de la caducidad, en los términos recién descritos y verificado que la demanda que nos ocupa no se ejercitó dentro del plazo que impone la ley, se sirva declarar el fenecimiento de la oportunidad para presentar la demanda y ordenar la terminación del proceso.

## FALTA DE JURISDICCIÓN

Esta defensa considera pertinente proponer la presente excepción, dado que en caso de carecer su Despacho de Jurisdicción para conocer del proceso que nos ocupa, deberá abstenerse de efectuar un pronunciamiento de fondo respecto a los pedimentos puestos a su consideración en esta oportunidad, en ese orden de ideas, nos permitiremos poner de presente de la manera más respetuosa los fundamentos de derecho que dan lugar a la excepción en comento:

Al respecto el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el aparte que trata el tema de los asuntos que son del conocimiento de dicha Jurisdicción, establece en el artículo 2º los asuntos de los cuales conoce, señalando lo siguiente:



**“ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL.** *La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:*

- 1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.*
- 2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral.*
- 3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical.*
- 4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.*
- 5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.*
- 6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.*
- 7. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices, dictadas conforme al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994.*
- 8. El recurso de anulación de laudos arbitrales.*
- 9. El recurso de revisión.*
- 10. La calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo.”*

En igual sentido, de encontrarse acreditado en el proceso, que quien acciona ostenta u ostentó la calidad de *empleado público*, sin perjuicio de la declaratoria de improcedencia del derecho reclamado, precisamente por la naturaleza jurídica de su vinculación con su empleador (Relación Legal y Reglamentaria), la cual no le permite ser beneficiario de una convención colectiva de trabajo, le solicitamos señor Juez declarar la falta de Jurisdicción y en consecuencia remitir el proceso a la autoridad jurisdiccional que considere competente de conformidad con el numeral 2 del artículo 155 de la ley 1437 de 2011.

## **NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS.**

El Código General del Proceso en su artículo 61, establece que:

*“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará*





*notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado”<sup>4</sup>*

Así mismo, establece que *“En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan”<sup>5</sup>*

Dicho lo anterior, y dado que las circunstancias que revisten este caso podrían eventualmente tener como consecuencia que el derecho se reconozca en forma proporcional, consideramos oportuna la vinculación como litisconsortes necesarios de todas las personas naturales o jurídicas, por activa o por pasiva que se encuentren legitimadas de conformidad con la prueba documental que obre en el expediente, a efectos que ejerzan su derecho a la defensa y contradicción, sobre las pretensiones y hechos que dan origen al presente proceso.

### **COSA JUZGADA**

El Código General del Proceso respecto de cosa juzgada, estableció lo siguiente:

**“ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.**

*Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.*

*En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.*

*La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”<sup>6</sup>(Negrilla y subraya fuera de texto)*

En este mismo sentido, la Corte Constitucional, en sentencia C- 774 de 2001, desarrolló de manera amplia y suficiente el concepto de cosa juzgada así:

**“La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.** Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias **y alcanzar un estado de seguridad jurídica.** De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de

<sup>4</sup> COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1564 (12, julio, 2012). *Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.* Diario oficial No. 48.489.

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> Código General del Proceso, Artículo 303: Cosa Juzgada.



*la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.*

(...)

**La cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.**

(...)

*Al operar la cosa juzgada, no solamente se predicen los efectos procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio.*

(...)

*Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere: Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente. Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa. Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.”<sup>7</sup>*

En la misma providencia de la Corte Constitucional, también se establecieron los requisitos para que una decisión haga tránsito a cosa juzgada, así:

**“En principio, cuando un funcionario judicial se percata de la operancia de una cosa juzgada debe rechazar la demanda, decretar probada la excepción previa o de fondo que se proponga, y en último caso, procede una sentencia inhibitoria.**

*Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:*

- **Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.** Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente

---

<sup>7</sup> Corte Constitucional, Sentencia C- 774 de 2001, MP Rodrigo Escobar Gil.





*se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.*

- **Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento.** Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
- **Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.**<sup>8</sup> (Negrilla y subraya fuera de texto)

Con base en lo anterior, si al interior del proceso llegare a obrar medio de prueba que permita acreditar la operancia de la cosa juzgada, solicitamos al Despacho que así lo declare y en consecuencia se ordene la terminación del proceso, por tratarse de una excepción previa que no permite saneamiento.

#### **PLEITO PENDIENTE ENTRE LAS MISMAS PARTES Y SOBRE EL MISMO ASUNTO.**

Considera esta defensa que en el presente asunto se debe verificar si se configura la excepción previa *pleito pendiente entre las mismas partes y el mismo asunto*, por lo que es preciso realizar un estudio previo respecto a la misma.

El Código General del Proceso en su artículo 100, consagra las excepciones previas entre las cuales se encuentra Pleito Pendiente, la cual establece lo siguiente:

***“ARTÍCULO 100. EXCEPCIONES PREVIAS.*** Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:

(...)

**8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.”**

(...)

En cuanto a la excepción de pleito pendiente la Corte Constitucional al resolver un proceso de Constitucionalidad en sentencia C- 355/06 hizo referencia a la excepción de pleito pendiente y al respecto considero:

*“(...) Acerca de estas alegaciones la Corte considera lo siguiente:*

*En materia procesal civil existe la excepción previa de pleito pendiente (Art. 97 C. P. C.), **que el demandado puede proponer cuando cursa otro proceso con el mismo objeto o pretensiones, por causa de unos mismos hechos y entre las mismas partes, de suerte que si el juez la encuentra probada debe disponer la terminación del nuevo proceso, en su etapa***

---

<sup>8</sup> Corte Constitucional, Sentencia C- 774 de 2001, MP Rodrigo Escobar Gil.



***inicial.** No obstante, dicha situación no origina la nulidad del nuevo proceso cuando no se propone oportunamente la excepción previa, conforme a lo previsto en el Art. 140 del C. P. C. Cabe señalar que los elementos constitutivos de dicha excepción son los mismos de la excepción de cosa juzgada, con la diferencia de que ésta sólo puede proponerse cuando en un proceso anterior se ha adoptado decisión definitiva sobre el mismo asunto. (...)*" (Negrilla y subrayado fuera de texto)

De acuerdo con la norma y jurisprudencia en cita y en caso de que en el expediente se encuentre prueba que permita establecer que existe otro proceso en curso entre las mismas partes y con el mismo objeto, con lo cual se configuraría la presente excepción, solicitamos muy respetuosamente que se declare la misma y se disponga la terminación del presente proceso.

## EXCEPCIONES DE MÉRITO

### INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR IMPROCEDENCIA DEL DERECHO PRETENDIDO

Recordemos entonces que dos de los problemas jurídicos del caso que nos ocupa, se sintetizan en (i) determinar si a parte demandante le asiste el derecho a que el acto jurídico a través del cual se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (R.P.M.) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (R.A.I.S.) sea dejado sin efectos jurídicos, por cuanto afirma que no fue informada de las desventajas que se derivarían de dicho traslado, y que encontrarse afiliada al RAIS hace que su situación pensional sea menos beneficiosa que bajo las condiciones que establece el RPM, y a su vez (ii) determinar si le asiste derecho a que se ordene a la entidad competente trasladarla nuevamente al RPM.

Respecto al primer problema jurídico planteado, es decir, la legalidad del acto de traslado de un régimen pensional a otro y las condiciones bajo las cuales se efectuó el mismo, es preciso reiterar que corresponde a la Administradora de Fondos de Pensión, desvirtuar las afirmaciones de quien acciona, concernientes al incumplimiento del deber de consejo e información que por mandato legal les asiste a las administradoras de pensiones, en virtud del cual a dichas entidades les corresponde informar al afiliado que pretenda trasladarse de régimen acerca de todas las implicaciones que dicho traslado pueda acarrear.

Sobre el deber de información al que se hizo alusión en el párrafo anterior, nos permitimos poner de presente lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral en sentencia de fecha 9 de septiembre de 2008, expediente 31989, M.P. Dr. Eduardo López Villegas:

*"(...)*

***La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información.***

***La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.***

***Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.***

***Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de***



asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención.

En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.

No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por la demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que “se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones”, pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña”

A través de la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SL 18445 Rad. 57302 del 28 de mayo de 2019, MP Cecilia Margarita Duran Ujueta, la anterior postura ha sido reiterada en los siguientes términos:

*“(…) las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido. (...)”*

Pues bien, según los argumentos esbozados en la jurisprudencia antes traída a colación, en cabeza de las administradoras de los fondos de pensión, recae el deber de suministrar a los interesados toda la información que resulte relevante en cuanto a las eventuales implicaciones que se pueden derivar de la decisión de trasladarse de un régimen a otro, tanto del procedimiento o trámite administrativo de traslado, como de las condiciones y/o requisitos a acreditar para el disfrute del derecho pensional perseguido, y en cuanto a éste punto en especial ha dicho la corte, que elegir el régimen pensional al cual se va a pertenecer acarrea consecuencias mayúsculas y vitales que deben ser advertidas por las administradoras de los fondos de pensión a los interesados.

En ese orden de ideas, y como quiera que lo que se persigue con la demanda que nos ocupa, es que el traslado de la parte actora del RPM al RAIS sea dejado sin efectos, por cuanto la AFP, no cumplió con el *deber de información y buen consejo* que de conformidad a la jurisprudencia citada con precedencia le asistía, es preciso indicar que NO tiene la entidad a la cual representamos responsabilidad alguna,



en el tratamiento que éstas hayan dado al trámite administrativo de traslado de la parte demandante, en ese orden de ideas, es preciso indicar que de conformidad a la jurisprudencia traída a colación con anterioridad, es claro que le asiste a la entidad AFP, la carga de demostrar a través de los medios idóneos y pertinentes que durante el trámite administrativo de traslado, brindó a la hoy demandante toda la información que le permitiera conocer las consecuencias que se derivarían de su afiliación con dicha entidad y consecuente traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, al cual pertenece. Veamos:

*“En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; **de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.**”*

En ese orden de ideas, al confrontar la realidad fáctica que rodea el caso que nos ocupa con la jurisprudencia citada en líneas precedentes, reiteramos que no es nuestra defendida la entidad que debe demostrar el cumplimiento del *deber de información* en el trámite de traslado de la parte accionante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Por otra parte, y en lo que respecta la viabilidad jurídica de acceder a un retorno de la parte actora al RPM, se precisa manifestar que los traslados de un régimen pensional a otro se encuentran reglamentados en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 en los siguientes términos:

*“e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. **Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.**” (Negritas fuera del texto original)*

A su vez se tiene que en virtud del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el requisito de edad para acceder a una pensión de vejez quedó modificado así:

*“A partir del 1º de enero del año 2014 la edad se incrementará cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.”*

En ese sentido, es preciso que en el caso concreto sea verificada la concurrencia de la circunstancia fáctica enunciada en la norma traída en cita, estableciendo la edad actual de la parte reclamante.

En ese orden de ideas, estima esta defensa que la solicitud de trasladar a la parte accionante del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida carece totalmente de asidero jurídico, dada la falta de acreditación de las condiciones que las normas que regulan la materia contemplan para el efecto, razón por la cual este Despacho deberá desestimar tal pretensión.

## FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Ahora bien, teniendo en cuenta las pretensiones de la parte demandante, es preciso indicar que aun cuando resultara procedente acceder a la declaratoria de ineficacia o nulidad del acto administrativo de traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, lo cierto es que la UGPP no sería la entidad legitimada o



competente para asumir la afiliación de la accionante, razón por la cual dicha entidad no se encuentra legitimada en la causa por pasiva dentro del presente litigio.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia al igual que los órganos de cierre de las jurisdicciones constitucional y contenciosos administrativa han reiterado el concepto de legitimación en la causa como *“la posibilidad de que una persona formule o controvierta las pretensiones contenidas en la demanda, por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso.”*

Puntualmente, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a este concepto en los siguientes términos:

*“que debe entenderse como la calidad que tiene una persona de formular o contradecir las pretensiones de la demanda por ser el sujeto de la relación jurídica sustancial, así existe legitimación en la causa por activa cuando hay una identidad del demandante con ser el titular del derecho subjetivo, es decir, quien está legitimado para reclamarlo y existe **legitimación en la causa por pasiva, cuando hay identidad entre el demandado con ser el sujeto que debe satisfacer el derecho**”*

De conformidad a la jurisprudencia traída a colación, es claro que la legitimación en la causa por pasiva, es la capacidad jurídica y procesal de la parte demandada para comparecer en juicio, es decir, la parte demandada debe ser la persona natural o jurídica que conforme a la ley sustancial, está legitimada para discutir, oponerse o contradecir una o varias pretensiones de la demandante, y eventualmente **la llamada a responder por los derechos que en el proceso se le reconozcan a quien acciona**, circunstancias que no se configuran en el caso que nos ocupa, y así quedará demostrado a lo largo de éste memorial.

Pues bien, a fin de esclarecer el por qué no podrá ser la UGPP la entidad eventualmente llamada a responder por las condenas que se pudieran derivar del presente litigio, traigamos a colación el artículo 2º del Decreto 575 de 2013, en el cual se establece el objeto con el cual fue creada dicha entidad:

*“Artículo 2º. **Objeto.** En los términos establecidos por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – **UGPP tiene por objeto reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional o de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando.**”*

*Así mismo, la entidad tiene por objeto efectuar, en coordinación con las demás entidades del Sistema de la Protección Social, las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social, así como el cobro de las mismas.”*

De lo anterior, es dable extraer que a nuestra poderdante no le fueron asignadas funciones propias de una Administradora de Fondo de Pensiones, en consecuencia, **no está habilitada para administrar recursos provenientes del Sistema General de Pensiones, hacer traslados de saldos, aprobar traslados de regímenes pensionales, recaudar cotizaciones y demás obligaciones que son reguladas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.**

Así mismo, es importante señalar que la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL fue creada por la Ley 6ª de 1945, sin embargo, el Gobierno Nacional ordenó su supresión, a través del Decreto 2196 de





2009, dicha entidad cesó sus funciones a partir del 12 de junio de 2009<sup>9</sup>, y su liquidación concluyó el 12 de junio de 2013. Con posterioridad Cajanal EICE en Liquidación debió continuar con los trámites de reconocimiento de pensiones causadas o que se causaran antes del 12 de julio de 2009, (fecha para la cual se estableció el vencimiento del término previsto por el artículo 4º del citado Decreto 2196 para el traslado de los afiliados al ISS), dicha obligación del proceso liquidatorio concluiría cuando la UGPP asumiera esa función.

Ahora bien, la UGPP se creó mediante la Ley 1151 de 2007, y en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 156 de dicha ley, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 169 de 2008, que a su vez señala:

*“Artículo 1º. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:*

*A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas*

*1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.*

De conformidad al contenido de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, la UGPP es la entidad competente para reconocer: (i) los derechos pensionales “causados” antes de la cesación de actividades de las administradoras exclusivas de servidores públicos; (ii) los derechos de los servidores públicos que cumplieron el tiempo de servicio y, sin cumplir la edad, se hubiesen retirado o desafiliado del régimen de Prima Media con Prestación Definida, antes de la cesación de actividades de la respectiva administradora. Lo anterior guarda relación con el contenido del artículo 2º del Decreto 575 de 2013, antes traído a colación, sobre la estructura y funciones de la UGPP.

En ese sentido, y como quiera que a la luz de la normativa vigente, la UGPP únicamente cuenta con facultades para reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones económicas de los servidores públicos que se hubieren causado o reconocido con anterioridad a la fecha<sup>10</sup> de supresión de las entidades, cajas o fondos públicos del nivel nacional que fueran administradoras exclusivas de tales derechos, lo cierto es que en el caso que nos ocupa, la parte demandante, no acredita encontrarse inmersa en ninguno de los dos escenarios contemplados en la norma.

Adicional a todo lo anterior, es de señalar, que, con posterioridad al 12 de junio de 2009, fecha en la cual se decretó la liquidación de la extinta Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, los afiliados cotizantes a dicha Caja fueron trasladados de manera masiva al Régimen de Prima Media del Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2196 de 2009:

***“ARTÍCULO 4o. DEL TRASLADO DE AFILIADOS.** La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación, deberá adelantar todas las acciones necesarias para el traslado de sus afiliados cotizantes, a más tardar dentro del mes siguiente a la vigencia del presente decreto, a*

<sup>9</sup> Fecha de entrada en vigor del Decreto 2196 de 2009.

<sup>10</sup> 12 de junio de 2009, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2196 de 2009.





*la Administradora del Régimen de Prima Media del Instituto de Seguro Social - ISS. Igualmente, deberá trasladar a dicha entidad los conocimientos sobre la forma de adelantar el proceso de sustanciación de los actos administrativos de reconocimiento de pensión de estos afiliados cotizantes, en la medida en que se trata de servidores públicos, para lo cual, estas entidades fijarán las condiciones en la que se realizará dicho traslado.”*

Por otra parte, se observa que la Ley 100 de 1993 en su artículo 52 expresamente estipuló que la entidad a cargo de administrar el régimen solidario de prima media con prestación definida sería el ISS hoy COLPENSIONES, veamos:

*“ARTICULO. 52.- Reglamentado por el Decreto Nacional 2527 de 2000, Reglamentado por el Decreto Nacional 3727 de 2003. Entidades administradoras. **El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.**”*

En concordancia con lo anterior, encontramos también que el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 creó la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, remitámonos al tenor literal de la norma a fin de constatar la naturaleza jurídica y el objeto de dicha entidad:

*“Artículo 155. **De la Institucionalidad de la Seguridad Social y la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.** Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 600 de 2008.*

(...)

*Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social, denominada **Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida** incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.*

***Colpensiones será una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, y procederá a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere. En ningún caso se podrá delegar el reconocimiento de las pensiones.**”*

Posteriormente encontramos el Decreto 4121 de 2011, “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones”, en el cual se estatuyeron el objeto y funciones de la entidad en los siguientes términos:

*“ARTÍCULO 2o. **OBJETO. De conformidad con el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, hace parte del Sistema General de Pensiones y tiene por objeto la administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida,** las prestaciones especiales que las normas legales le asignen, y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, en los términos que determine la Constitución y la ley, en su calidad de entidad financiera de carácter especial.*

(...)



**ARTÍCULO 5o. FUNCIONES.** Además de las funciones señaladas en la legislación vigente, como consecuencia del cambio de naturaleza jurídica, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, cumplirá las siguientes:

**1. Administrar en forma separada de su patrimonio los recursos correspondientes al régimen de prima media con prestación definida, de conformidad con la ley.**

**4. Realizar las operaciones de recaudo, pago y transferencias de los recursos que deba administrar.** Para este efecto, podrá hacerlo directamente o por medio de terceros, asociándose, celebrando acuerdos de colaboración empresarial, efectuando convenios o contratando con instituciones financieras o sociedades que presten servicios de administración de redes de bajo valor. También podrá realizar estas operaciones directamente de acuerdo con las normas vigentes, siempre y cuando demuestre que está en condiciones de hacerlo a costos inferiores que los que encuentre en el mercado.

De la interpretación exegética de la normativa referenciada líneas atrás, se evidencian con claridad los objetos y funciones que legalmente fueron asignados a cada entidad, en ese sentido, nos permitimos indicar que de resultar procedente el retorno de la parte demandante al régimen de prima media con prestación definida, la entidad llamada asumir la afiliación de la peticionaria sería COLPENSIONES y no la UGPP, puesto que aun cuando los afiliados a Cajanal deben ser pensionados por la UGPP, lo cierto es que éstos, deben acreditar haber causado sus derechos antes de la cesación de actividades de la entidad en mención, o por lo menos acreditar que a dicha fecha, se contaba con el tiempo de servicios exigidos por las normas que regulan su derecho pensional, escenario, que no se acredita en el caso que nos ocupa.

En virtud de todo lo anterior, solicitamos de manera respetuosa al despacho que en caso de considerar que le asiste derecho a la parte actora a ser trasladada del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida, absuelva a nuestra representada de las responsabilidades que dicho traslado llegare a implicar, dado que como se sustentó con precedencia, la UGPP no es la entidad legitimada en la causa por pasiva para responder por tales obligaciones.

### **PRESCRIPCIÓN TRIENAL**

Proponemos esta excepción sin que ello implique allanamiento a las suplicas de la demanda. Lo anterior con el fin de que en el evento que el señor Juez determine, que en efecto el acto de traslado del Régimen de Prima Media al RAIS, se encuentra inmerso en una situación de nulidad, declare que en todo caso en el presente trámite operó el fenómeno jurídico de la *prescripción*, toda vez que desde el momento en que se verificó dicho traslado, hasta la fecha en que se presentó la primera reclamación tendiente a que se dejara sin efectos el mismo, transcurrieron más de tres (3) años, lo anterior de acuerdo a los parámetros legales consignados en los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.L. los cuales establecen lo siguiente:

**“ARTICULO 488. REGLA GENERAL.** Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.”

**“ARTICULO 151. -Prescripción.** Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”



De esta forma, solicitamos a su Despacho, de la forma más respetuosa, que, si llegare a considerar que hay derecho a lo pedido, considere declarar la prosperidad de la presente excepción sobre todas aquellas mesadas causadas con anterioridad a los 3 años que precedieron a la reclamación.

**BUENA FE**

La Entidad demandada actuó con amparo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, Y demás normas concordantes y los criterios jurisprudenciales emanados por la Honorable Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, sobre el tema. En tal sentido no ha existido mala fe en el trámite dado en sede administrativa a las peticiones y hechos de que trata este proceso.

**NOTIFICACIONES JUDICIALES:**

**CORREOS ELECTRÓNICOS PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES:**

- [opacheco@ugpp.gov.co](mailto:opacheco@ugpp.gov.co)
- [notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co](mailto:notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co)

**TELEFONOS DE CONTACTO:**

- 314 6802976 – 300 7642610.

**ANEXOS:**

- Poder General Escritura Pública No. 170 del 17 de enero de 2023 de la Notaría Setenta y Tres del Círculo de Bogotá.

De usted.

Atentamente,

  
**ORLANDO DAVID PACHECO CHICA**

C.C. No. 79.941.567 expedida en Bogotá D.C.

T.P. No. 138.159 del C.S de la J.

Proyectó: María Alejandra Benítez Flórez.

Aprobó: ODPCH